



## LA REFORMA TRIBUTARIA Y LA REALIDAD MACROECONOMICA

*Marcelo Ramón Lascano*

Vientos de reforma han poblado las páginas de algunos medios, desafortunadamente sin información específica. Ello abre incógnitas respecto de los alcances que tendría la iniciativa, si existiera. Aquí parecen oportunas, entonces, dos conjeturas respecto de las intenciones implícitas de las ideas en danza.

La primera supondría recomendar ajustes muy limitados con los consabidos propósitos recaudatorios. La segunda, aunque menos probable, buscaría mejorar el sistema en el nivel nacional, corrigiendo distorsiones y tal vez introduciendo una equilibrada dosis de equidad, para rescatar la idea de justicia en el universo de la imposición.

Cualesquiera fuere la suerte y alcance de la ideas en circulación, una condición parece indispensable para motorizarlas: la **madurez con que se encare el tema**. Este requisito demanda, a su vez, la concurrencia de dos aspectos irrenunciables. De un lado contemplar objetivamente la realidad macroeconómica actual y las tendencias futuras previsibles. Del otro y cuando más ambiciosa resulte la iniciativa, parece aconsejable convocar a académicos y expertos intersectoriales para intercambiar proposiciones susceptibles de ajustar los cambios, con profesionalidad e imparcialidad.

**Como la tributación debe ponerse al servicio del desarrollo y del empleo**, parece redundante impugnar propósitos exclusivamente recaudatorios, desde que suelen entrañar el riesgo de abortar imprescindibles procesos de inversión y de cambio técnico en ejecución. La definición precisa de los objetivos económicos nacionales, evita elegir caminos equívocos. Por ejemplo, si de lo que se trata es de acumular capital, magnificar la demanda de trabajo e incrementar las exportaciones, quedaría claro que penalizar lo que conviene a esos objetivos conjuraría contra los mismos.

Un sistema fiscal racional, además de no dificultar el desarrollo con pleno empleo en un escenario de precios estables, debería contemplar dos recaudos íntimamente vinculados con el desempeño presupuestario y externo, a saber: observar el principio de **suficiencia** de los recursos para limitar el endeudamiento interno y externo y el principio de **elasticidad**, de modo que los ingresos públicos respondan razonablemente a las fluctuaciones cíclicas. Recaudaciones generosas y aún más que proporcionales durante las expansiones y disminuciones durante la fase alternativa del ciclo cerrarían la exigencia. Por supuesto, la coordinación monetaria-crediticia- cambiaria integraría el enfoque.

Nuestro sistema responde a algunas universalidades consagradas por la experiencia aquí y en el resto del mundo. El impuesto a las Ganancias, el impuesto al Valor Agregado y los denominados Impuestos Internos Unificados, entran en esa categoría. Los impuestos de base patrimonial como el denominado Bienes Personales entre nosotros, no configuran una categoría histórica arraigada y mucho menos generalizada, debido al magro rendimiento, a las dificultades que genera su recta administración y a los eternos problemas de detección y de valuación de los

bienes, de modo que limita la imposición virtualmente a los activos registrables en el país, lo cual significa una ostensible burla a la equidad que se invoca para justificarlo.

En el territorio de las excepciones, entre las categorías exóticas aparecen, por simplificar, el impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios y los Derechos de Exportación, mal denominados Retenciones. Si bien es cierto que, sobre todo la implantación del último, responde a circunstancias excepcionales, no lo es menos que su extensión durante un quinquenio también denuncia las imperfecciones del impuesto a las Ganancias, que es el gravamen que debería alcanzar las superrentas derivadas de la fuerte devaluación de nuestro signo monetario y compartir los ingresos con las demás unidades políticas que integran el sistema de coparticipación federal de impuestos.

Bien. Si se tratara de afirmar el crecimiento y la demanda de empleo, parece que sería razonable apuntar a la implantación de un enfoque que satisfaga algunos de los recaudos mencionados. La íntima relación existente entre acumulación de capital, cambio técnico y aumento del nivel de actividad, en el Impuesto a las Ganancias debería inducir a distinguir entre beneficios **reinvertidos** y beneficios **distribuidos**, en obsequio de los primeros porque precisamente privilegian la expansión de la frontera productiva.

De paso, el financiamiento con recursos propios de las firmas descomprimiría costos y podría liberar fondos prestables en el sistema con menores tasas de interés, todo con ventajas para encarar con éxito las eventuales presiones inflacionarias siempre subyacentes.

La presión sobre los bienes de consumo generalizado de la población sobre los que básicamente recae el IVA, debería reducirse drásticamente. La eventual pérdida de ingresos podría compensarse con ajustes en algunas categorías integradoras de la imposición específica alcanzada por los Impuestos Internos, sobre todo cuando configuran ostensibles muestras de capacidad contributiva. La inclusión de rentas financieras, de la transferencia de títulos y valores y de ganancias derivadas de la transferencia no periódica de bienes personales en el impuesto a las Ganancias, también contribuiría a aumentar la recaudación y a compensar eventuales pérdidas de ingresos.

Se reitera que el objetivo asignado a la política económica es el crecimiento con pleno empleo en un contexto de solvencia fiscal y externa a cuyo servicio deben ordenarse las finanzas públicas federales. La selección de impuestos debe estar en armonía con el resto de las políticas macroeconómicas. En esta inteligencia, los gastos públicos, por su parte, y los criterios de financiamiento, deberán ser compatibles con los objetivos de crecimiento del PBI y el comportamiento esperado de las recaudaciones, de los balances de pagos y del ahorro interno para evitar la renovación de pasivos externos a la larga política y económicamente condicionantes.

La disminución de la presión tributaria sobre el consumo básico de la población constituye un compromiso que no necesita demostración, lo mismo que privilegiar al contribuyente **que innova y reinvierte** parte de sus utilidades, en tanto así se asegura la continuidad de la expansión de la actividad económica y del empleo como vehículos para garantizar la estabilidad del sistema y la mayor competitividad externa de la economía.

El tema de las retenciones demandaría un examen independiente, habida cuenta las connotaciones y las a veces groseras simplificaciones que lo rodean, como la que supone rindes parejos ignorando los diferenciales de productividad por motivos técnicos o diversidades geográficas. Al margen de su justificación en el contexto que inspiró nuevamente su instauración, no debe olvidarse que al igual que el denominado impuesto al cheque, los derechos de exportación son ajenos a un sistema racional y conllevan el peligro de su inconveniente perennidad y la postergación de un enfoque más ambicioso para el impuesto a las Ganancias, que es el que debería incluir esos ingresos extraordinarios en el flujo corriente de

rentas personales. Así se integraría correctamente la globalidad de las fuentes y la progresividad que constituye uno de sus principales atributos.

No se me escapa lo difícil que resulta conciliar intereses y mucho más declinar algunas fuentes de ingresos para la economía estatal. Pero igualmente me parece arduo poder confiar en el sistema tributario dominante durante muchas décadas con resultados que no denuncian precisamente sus virtudes. Si dejamos de lado los gravámenes que recaen sobre el comercio de exportación y los débitos y créditos, quedarían al desnudo las limitaciones puntualizadas porque cambiarían la fisonomía de las recaudaciones. Se está a tiempo de ajustes que deberían contemplar, entre otras cosas, que el ciclo mundial actual puede cambiar de signo y con ello nuestra suerte.